

EL MERCURIO

FUNDADO POR AGUSTIN EDWARDS

Pesada Herencia

El gobierno del Presidente Frei ha debido enfrentar la pesada herencia de no pocos hechos o rasgos negativos de la gestión del ex Presidente Aylwin. Así, el segundo gobierno de la Concertación hubo de iniciarse en medio del escándalo de Codelco, el más grande hasta ahora registrado en la historia nacional. Igualmente, ha soportado desde el primer momento los costos de desprestigio que significa tener que asumir las derivaciones de las muchas irregularidades que proliferaron en el sector durante su predecesor, sin tener sanción oportuna y suficiente. Además, extendidas como se encuentran ya esas irregularidades, su erradicación no es ahora asunto de fácil solución.

En el ámbito internacional no se asimilaban todavía las repercusiones del virtual fracaso de un pronto ingreso de Chile al NAFTA cuando el Gobierno ha tenido que hacer frente al devastador fallo sobre Laguna del Desierto, como resultado de un manejo realizado casi íntegramente durante la presidencia anterior, según criterios y en forma y oportunidad que no han podido menos que despertar amargas críticas de los más variados sectores, y cuyo conjunto resulta para el actual Ejecutivo muy difícil de defender con convicción y entusiasmo. Una consecuencia histórica de lo cual es que el Presidente Frei se encuentre hoy en la ingrátísima situación de que el territorio nacional vaya a ser, al término de su mandato, más pequeño que al comienzo del mismo.

En ese marco se inserta, igualmente, la continuación de presiones salariales del sector público. Las expectativas al respecto fueron alimentadas por la Concertación entre 1988 y 1990, pero una vez en el poder no pudo satisfacerlas en el mismo grado en que habían sido estimuladas. La administración Aylwin no siguió una política de profundización de la economía de mercado, sino sólo de mantención más o menos reticente de la misma, con lo cual afectó el ritmo de crecimiento económico en relación con el po-

tencial del país. En consecuencia, se le restó a Chile y a la gestión de la propia Concertación el impulso dinamizador y la descompresión social que habrían resultado de seguir llevando adelante las privatizaciones. En cambio, debió soportar la inercia, la ineficiencia y el descontento social propios del burocrático aparato estatal; este último, además, fue expandido durante el cuatrienio pasado, agravando los problemas ya existentes.

Ese descontento, atizado por sectores de izquierda que buscan recuperarse de su descalabro mundial, ha continuado manifestándose durante el último semestre en sucesivos conflictos laborales en el sector público. Primero paralizaron ilegalmente los profesores, en abril y mayo; después lo hicieron los mineros del carbón, en mayo, junio y agosto; posteriormente, los médicos de la salud estatal reavivaron su crónico diferendo salarial, ante los primeros signos de un intento racionalizador por parte del ministro del ramo, y llegaron a una huelga ilegal el pasado jueves 27, anunciando otros dos días de paro en noviembre. La más reciente amenaza de otra huelga ilegal proviene de los empleados judiciales, que la anuncian para el próximo 7 de noviembre.

Tanto en el primero como en el segundo gobierno de la Concertación estos conflictos se han resuelto mediante concesiones de la autoridad, que ha otorgado parte importante de lo exigido por los gremios. En ningún caso la inconstitucionalidad e ilegalidad de las convocatorias y paralizaciones ha significado sanción legal o administrativa para sus responsables, como sería normal en un Estado de Derecho. El ministro Massad ha anunciado que las habrá en el caso del paro de la salud pública, pero otras advertencias similares no se han hecho realidad desde 1990 a esta parte. De no modificarse este cuadro, el país debe estar preparado para interminables casos parecidos en el futuro.

451-26